

Talca, dos de agosto de dos mil veinticuatro.

Que a esta Corte le corresponde pronunciarse sobre el recurso de apelación deducido por el abogado de la demandante Forestal Mininco S.p.A. don Jean Pierre Latsague Lightwood y de dos interpuestos por el abogado don Raimundo Contreras Meza, en representación de la demandada doña Marta Sonia Letelier González, concedidos en la causa C-218-2019 del Juzgado de Letras de Constitución, demanda reivindicatoria, caratulada "Forestal Mininco S.A. con Letelier".

Se les asignó los roles 2101-2022, 2040-2023 y 200-2024, respectivamente.

A folio 23, el 7 de marzo de 2024, en recurso rol 76-2023, se tuvo a la parte que representa el letrado don Raimundo Contreras Meza por desistida del recurso de apelación deducido en contra de la resolución de 5 de enero de 2023, de folio 5 del cuaderno de incidente de acumulación.

También se dispuso la desacumulación de él Rol N°2101- 2022 y 2040-2023, y que hecho lo anterior, se devolviera el arbitrio Rol N°76-2023, al tribunal de origen.

En el folio N°. 10 del recurso Rol 2101-2022, con fecha 21 de noviembre de 2023, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 66 del Código Orgánico de Tribunales, se dispuso la acumulación a él del Rol 2040-2023.

En el folio N°. 18 del recurso Rol 2101-2022, con fecha 1 de marzo de 2024, de acuerdo a la precitada norma del Código Orgánico de Tribunales, se dispuso la acumulación a él del Rol 200-2024.

Visto:

- En cuanto al recurso Rol 2101-2022.

Primero: La demandante representada por el abogado don Jean Pierre Latsague Lightwood interpone recurso de apelación subsidiario al de reposición en contra de la resolución de 9 de noviembre de 2022, folio 122, en aquella parte que rechaza la solicitud planteada con fecha 24 de octubre de 2022, folio 110, en la que de conformidad a los artículos 339 y 340 del Código de Procedimiento Civil, solicitó que se decretara un término especial de prueba para rendir la testimonial de don Manuel Escudero Escudero y



don Cristián Díaz Sánchez, ambos individualizados en la lista de testigos de su parte.

Las audiencias testimoniales quedaron fijadas en definitiva para los días 20 y 21 de octubre de 2022 a las 9:30 horas, conforme lo dispuso la resolución de folio 67.

Luego, según consta en los folios 94 y 95, los señalados testigos fueron debidamente citados, siendo notificados por cédula con anterioridad a la fecha de las audiencias, específicamente el día 6 de octubre de 2022. No obstante lo anterior, por causas ajenas a la voluntad de su parte, los referidos testigos no comparecieron a las audiencias testimoniales, de modo que se solicitó se decrete el término especial de prueba en comento.

La situación descrita configura un entorpecimiento que ha impedido a su parte rendir la prueba testimonial, de manera que corresponde decretar un término especial de prueba conforme a las normas legales ya referidas.

Sin embargo, la resolución recurrida no accedió a dicha petición, no obstante presentarse los supuestos fácticos, de modo que la resolución no se ajusta a derecho y por consiguiente corresponde que sea dejada sin efecto.

El fundamento de la resolución recurrida fue que no se habría dado cumplimiento a lo prescrito en el inciso 2º del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, y considera que la mera ausencia de los testigos por sí sola no genera entorpecimiento alguno.

En primer lugar, esta afirmación no incide en el hecho de que efectivamente se configuró un entorpecimiento y, de hecho, la norma regula una situación distinta a la acontecida.

Pues bien, la norma en comento se refiere a la posibilidad de que el tribunal disponga que un testigo sea compelido a presentarse a declarar al juicio por medio de la fuerza pública, cuando éste, estando legalmente citado, no comparece a declarar. Dicha posibilidad es un derecho para las partes, pero desde luego que para que se ejerza, el testigo no tiene que haber comparecido a las audiencias para las que fue citado. Constatado lo anterior, lo que corresponde es alegar un entorpecimiento y, eventualmente, se puede ejercer este derecho.

Agrega que, las partes no están legalmente facultadas para forzar a una persona a comparecer en juicio, y es por eso que el ordenamiento



contempla la posibilidad de citar a los testigos y para el caso en que no concurran, se les puede incluso hacer comparecer con el auxilio de la fuerza pública, conforme lo establecen los artículos 359 inciso 1° y 380 del Código de Procedimiento Civil. De lo anterior se sigue que son los testigos los que deben justificar su inasistencia, no las partes del juicio, como por lo demás lo señala de manera expresa la normativa indicada. De lo anterior se sigue, naturalmente, que la incomparecencia de un testigo citado es una situación que configura un entorpecimiento para la parte interesada en rendir la prueba.

Para ilustrar el punto, se ha insertado un extracto de la página 109 del Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilenas, Código de Procedimiento Civil, Editorial Jurídica de Chile, 2011, t. II.

Cita sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol 177-2019 civil, y autos Rol E-564-2022, del 1° Juzgado Civil de Concepción, Rol C-4784-2017, del 2° Juzgado Civil de Concepción y Rol E-2393-2022, del 3° Juzgado Civil de Concepción.

A mayor abundamiento, la situación descrita encuadra perfectamente con la definición de entorpecimiento que se ha adoptado anteriormente en estos autos (resolución de folio 1 del cuaderno de incidente general), esto es, “todo obstáculo subjetivo, objetivo o legal que imposibilite de un modo imprevisto la recepción de la prueba, o el transcurso normal del término probatorio”.

Por último, interesa también hacer notar que una eventual negativa a decretar el término especial de prueba constituye un serio atentado contra la garantía constitucional del debido proceso que le asiste, garantía que, como se sabe, envuelve el derecho a aportar la prueba respectiva y oportunamente ofrecida. En consonancia con ello, el ordenamiento procesal civil establece que la falta de diligencias probatorias que puedan ocasionar indefensión, como lo sería la prueba testimonial de su parte, constituye un vicio de casación en la forma que anula el proceso (artículo 768 N° 9, en relación con el artículo 795 N° 4 del Código de Procedimiento Civil).

Finalmente solicita que se acoja el arbitrio y se enmiende con arreglo a derecho la resolución recurrida, revocándose y, en consecuencia, se disponga que se concede el término especial de prueba pedido, fijando el



día y hora para recibir la testimonial indicada o, en subsidio, ordenando al tribunal a quo que fije el día y hora para tales efectos, concediendo un plazo razonable para notificar a los testigos, con costas en caso de oposición.

Segundo: Que, el inciso segundo del artículo 380 del Código de Enjuiciamiento Civil establece que el testigo legalmente citado no comparezca, podrá ser compelido por medio de la fuerza a presentarse ante el tribunal que haya expedido la citación, a menos que compruebe que ha estado en imposibilidad de concurrir.

Por estos fundamentos y lo dispuesto en los artículos 144 y 186 del Código de Procedimiento Civil, se confirma la resolución apelada de 9 de noviembre de 2022, sin costas, por haber tenido el incidentista motivos plausibles para alzarse.

-En lo que respecta al recurso Rol 2040-2023.

Tercero: Que, la demandada representada por el abogado don Raimundo Contreras Meza, interpone recurso de apelación subsidiario al de reposición en contra de la resolución de 19 de octubre de 2023, folio 142, en aquella parte que rechaza la incidencia de abandono del procedimiento.

La resolución que rechazó la petición de abandono del procedimiento, plantea que en el estado procesal en que se encontraba la causa, era obligación del tribunal haber citado a las partes a oír sentencia y dictar fallo, y que no era necesario que la demandante instara por ello, razón por la cual la demandante no habría incurrido en situación de abandono de la causa.

Estima que dicho criterio es erróneo, en sede civil, porque al amparo de ese criterio manifestado en la resolución impugnada, la causa pudo haberse mantenido paralizada y seguir así por mucho más tiempo inclusive, y, pese a ello, jamás se habría podido pedir el abandono del procedimiento no obstante ser evidente el abandono y falta de diligencia de la parte demandante al no instar porque se citara a las partes a oír sentencia.

El artículo 687 del Código de Procedimiento Civil, no puede constituirse en una nueva causal de excepción al abandono del procedimiento. Si el Tribunal no cita a las partes a oír sentencia, claramente cualquiera de las partes y en especial la demandante puede



instar por aquello, a fin de dar avance a la causa y obtener quede en estado de ser fallada.

Estima que no procede sostener que vencido el término probatorio, el impulso del proceso quede exclusivamente entregado al Tribunal, y que eso importe una liberación al actor en orden a instar porque el proceso llegue a término.

Señalar que los principios dispositivo y de pasividad son los que imperan en el procedimiento civil y que si hay situaciones de oficialidad, ello no obsta al impulso de parte en caso que el Tribunal se mantenga sin dar avance al proceso.

La Excma. Corte Suprema en fallo de 14 de noviembre de 2001 recaído en causa rol 1826-2001, y en fallo de 26 de octubre 2005 recaído en causa rol 274-2005, estableció que el mero hecho de hallarse vencido el término probatorio en el procedimiento sumario, no obsta a que las partes queden exentas o se les releve de la obligación que les asiste de instar porque se dé curso progresivo al proceso y que se cite a las partes a oír sentencia, y que la falta de actividad del tribunal a cargo del asunto no puede servir para justificar la inacción de las partes, y que el demandante no puede escudarse en el carácter mixto para justificar su falta de diligencia.

Independiente el tenor del artículo 687 del Código de Procedimiento Civil, eso no puede llegar a eximir al demandante de instar porque se cite a las partes a oír sentencia si el tribunal no lo hace de oficio, lo que es evidente, puesto que de entender lo contrario el proceso podría quedar paralizado por tiempo indefinido y jamás podría aplicarse el abandono del procedimiento y darse un término a este proceso, y el tribunal podría en cualquier tiempo posterior a los seis meses, como ha ocurrido en autos, citar a las partes a oír sentencia, y lo mismo ocurriría con el demandante que podría en cualquier tiempo posterior pedir se cite a las partes a oír sentencia, lo cual deriva en un contrasentido procesal frente a los principios generales que inspiran los procesos civiles. O sea, su parte demandada en autos, quedaría en suspenso, a la espera que, sin importar el tiempo de paralización de la causa, en cualquier tiempo posterior se reactive y recién se proceda a citar a las partes a oír sentencia. Eso lo estima injusto y genera



evidente desigualdad entre las partes del juicio y a la vez una condición de máxima inseguridad jurídico procesal para la parte demandada.

Concluye solicitando que se acoja el recurso y revoque la resolución apelada y en su reemplazo dé lugar al incidente y declare abandonado el procedimiento de autos.

Cuarto; Que, si bien es cierto hubo cesación en la actividad procesal de la demandante, ella atendido el estado del proceso dependía del tribunal, razón por la cual no se configura uno de los requisitos del abandono del procedimiento, cual es el transcurso del plazo.

Por estos fundamentos y lo dispuesto en los artículos 144 y 186 del Código de Procedimiento Civil, se confirma la resolución apelada de 19 de octubre de 2023, sin costas, por haber tenido el incidentista motivos plausibles para recurrir.

-En cuanto al recurso Rol 200-2024.

Visto:

Se reproduce la sentencia en alzada, mutando en ella toda referencia a la inscripción en el Registro de Propiedad del año 2018 del Conservador de Bienes Raíces de Constitución a la fojas 293 N° 309 por la de fojas 293 vuelta N° 309 y el nombre Gladys Sanz Gallardo por Marta Sonia Letelier González.

Quinto: Que, la misma parte interpone recurso de apelación en contra de la sentencia de 5 de diciembre de 2023, por las razones que expresa:

En primer lugar, el fallo apelado da cuenta en su considerando Primero de la acción impetrada por la demandante, donde se cita el título de dominio cuya cancelación se pretende obtener, es decir, la inscripción a nombre de la demandada, doña Marta Sonia Letelier González y que rola inscrito a fojas 293 vuelta N°309 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Constitución, correspondiente al año 2018, mismo antecedente de esta parte en la contestación de la demanda en cuanto al título de su representada. Sin embargo, en los considerandos Octavo, Décimo Primero y Décimo Tercero, y en su parte resolutive, se cita como título de la demandada la inscripción de fojas 293 N°309 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Constitución,



correspondiente al año 2018; es más, en su considerando Décimo Cuarto, señala que la demandada es doña “GLADYS SANZ GALLARDO”; es en razón de ello, que surge la interrogante si efectivamente se analizaron suficientemente los antecedentes obrados en autos, o existió una confusión con otra causa tramitada por la misma demandante ante el Tribunal, autos Rol C-406-2020, en similares términos que la presente causa, pero dirigida en contra de otra demandada, causa en la cual se dictó sentencia de primera instancia antes que en la presente. No ve la razón que justifique esta confusión del nombre de la demandada de la presente causa si se entiende que la presente sentencia ha sido dictada conforme al mérito del presente juicio y para las partes específicas de esta causa. En segundo lugar, en el considerando Sexto de la sentencia impugnada, se señala que la prueba debe apreciarse conforme lo establecen los incisos 3° y 4° del artículo 22 del Decreto Ley 2.695, no obstante ello, llegó a tal punto el error cometido que señala que todos los testigos son hábiles, dándole pleno valor probatorio a todas las declaraciones testimoniales, prescindiendo de las tachas formales que se dedujeron en contra de dichos testigos. Es la misma norma la que estipula si hubiese necesidad de prueba se rendirá en el plazo y forma establecidos para los incidentes y es así que el Código de Enjuiciamiento en su artículo 90, hace mención expresa a la tacha de testigos, y de acuerdo a lo obrado en autos, los testigos de la demandante fueron tachados por ser trabajadores dependientes directos de la parte que los presenta, por consiguiente les afectaba la tacha alegada en su contra ya que al ser dependientes remunerados de la demandante su testimonio carecía de todo valor legal. La sentencia impugnada incurre en un error al hacer incompatible la formulación de tachas en un proceso que deba ser decidido en conciencia, pues independiente que el Tribunal pueda resolver conforme a las reglas de la sana crítica, o en conciencia, la ley para estos tipos de procedimiento, no excluye la formulación de tachas frente a testigos inhábiles. Sin perjuicio de lo anterior, se debe destacar que son los mismos testigos de la demandante quienes dan por hecho cierto que la demandada ha ejercicio posesión material del terreno que se pretende reivindicar, reconociendo que hace años lo ha mantenido cercado, con plantas ornamentales y con construcciones de tipo habitacional; de forma notoria y



de conocimiento público, sin que exista antecedente alguno de vías de hecho o clandestinidad en su posesión ni de juicios anteriores en su contra o en contra de quienes le vendieron ese retazo de terreno que forma parte de la sucesión Barrera. En este sentido, el Tribunal tuvo que haber valorado en favor de la demandada las declaraciones de los testigos presentados por la parte contraria al tiempo de reconocer a la demandada como poseedora material desde muchos años a la fecha y a vista y paciencia de todo el mundo del retazo de terreno materia de autos. En tercer lugar, señala que en la causa se llevó a efecto un informe pericial a petición de la parte demandante con el objeto de acreditar la existencia del retazo de 36 hectáreas que alegan como de su dominio y acreditar además que existe superposición entre el retazo inscrito por la demandada y aquellas 36 hectáreas reclamadas por la demandante, y es del caso que el fallo apelado confiere pleno valor probatorio al informe pericial elaborado por el topógrafo, don Hernán González Muñoz, sin haberse detenido a analizar y advertir que existen pasajes confusos en dicho informe o derechamente omisiones sobre aspectos importantes para concluir la supuesta superposición de terrenos; así la cosas, el informe asevera que existe una superposición entre el inmueble regularizado por la demandada y el retazo no parcelado de 36 hectáreas del fundo Los Pellines y Papirúa, pero acto seguido informa que existe sólo una superficie de 16,14 hectáreas de aquellas presuntas 36 hectáreas que reclama la demandante, intentando justificar esa enorme diferencia de superficie aludiendo a poca modernidad o inexistencia de aparatos tecnológicos de la época en que se estableció aquella superficie de 36 hectáreas, pero tal situación de diferencia de superficies entre lo reclamado por la demandante y lo constatado en terreno por el perito, hace a lo menos dudar de la aseveración de existir superposición de títulos y a la vez de ser o corresponder esas 16,14 hectáreas a lo que la demandante alude como retazo no parcelado de 36 hectáreas. Asimismo, dicho informe señala diversos polígonos y deslindes, y curiosamente no hace especificación alguna del deslinde SUR, limitándose a señalar “varios propietarios”, no existiendo impedimento alguno para individualizar completamente a los propietarios de los inmuebles que colindan en aquella orientación; lo que bien podría determinar o al menos



hacer cuestionar si efectivamente el terreno de la demandada estaría superpuesto con algún título que ampare algún terreno de la demandante, o corresponde a un terreno vecino, de propiedad de un tercero ajeno al presente juicio. Es más, el aludido informe nada dice sobre la sucesión Barrera, en donde miembros de la misma fueron quienes vendieron el retazo de terreno a la demandada, existiendo antecedentes registrales como inscripciones especiales de herencia, aportados que dan cuenta que dicha sucesión Barrera es poseedora inscrita de terrenos que limitan con playas de mar en ese mismo lugar. Por otro lado y a mayor abundamiento, el perito refiere que el retazo de terreno figura con Rol de Avalúo N°900-2 de la comuna de Constitución, aludiendo al presunto predio de la empresa demandante, pero sin advertir y hacer cuestionamiento a que el certificado de avalúo emitido por el Servicio de Impuestos Internos indica que dicho Rol corresponde al resto del predio de sucesión Barrera; hecho que el informe omite lisa y llanamente, y por supuesto que el Tribunal tampoco realiza algún análisis sobre estos puntos. En igual sentido, el plano antiguo agregado bajo el N°21 del Protocolo del año 1958, acompañado por el perito, indica que en el sector “no parcelado” existen una serie de retazos de terrenos atribuidos en el mismo plano a diversos propietarios distintos entre sí, pero no se hace ningún análisis detallado respecto de la posibilidad que el terreno saneado por su representada pueda estar comprendido en dichos retazos, sino de manera categórica se afirma que está superpuesto en el terreno que supuestamente corresponde a la demandante, omitiendo información sobre si efectivamente hizo el estudio correspondiente que descarte cualquier otra posibilidad. En este orden de ideas, el informe pericial señala haberse basado en un “plano antiguo de Parcelación”, e indica que corresponde al que “se encuentra agregado con el número ciento cincuenta y tres (153) del Registro de Instrumentos Públicos correspondiente al Segundo Cuatrimestre de la Notaría de Constitución, en el año mil novecientos cincuenta y ocho”; sin embargo, el mismo peritaje acompaña como documento un plano antiguo, el cual indica que se encuentra agregado bajo el N°21 del Protocolo de 1958, lo que se contrapone al plano agregado por la demandante, quien en su demanda alude al plano agregado bajo el número 28 del Protocolo de 1958, sin hacer mención alguna al



plano agregado con el N°153; esto claramente genera la duda respecto de la certeza con la que el perito realiza sus conclusiones, lo que debió con mayor razón haber generado dudas al tribunal al tiempo de analizar las pruebas rendidas. Así las cosas, en el plano que acompaña el perito se hace referencia a una superficie no parcelada de más de 145 hectáreas; hecho que le permite determinar que ahora tienen tres superficies de terreno no parcelado, a saber: una de poco más de 145 hectáreas señalada en el recuadro del plano, otra de 36 hectáreas señalada en la demanda, y otra de poco más de 16 hectáreas señalada en el informe pericial. O sea, claramente el retazo no parcelado de 36 hectáreas reclamado por la demandante no existe y, lo que pide la demanda es que se reconozca como dueña de ese retazo de 36 hectáreas que pericialmente no pudo ser constatado, por lo que menos podría el Tribunal haber acogido la demanda y declarado que ese predio de 36 hectáreas sea de dominio de la demandante por cuanto esas 36 hectáreas no existen en la realidad. Y bajo esa misma premisa mal pudo el sentenciador disponer la cancelación del título de la demandada si no existe certeza plena de la existencia de superposición si se tiene presente que el informe pericial no encontró las 36 hectáreas reclamadas y sólo dio a conocer un retazo de terreno de poco más de 16 hectáreas. Por otro lado, la sentencia en parte alguna de sus conclusiones da por acreditado la existencia de la superposición de título alegada por la demandante y en el caso de que así lo hubiese hecho tendría que haber analizado a quien de las dos partes correspondía el mejor derecho para mantenerse en el dominio del inmueble partiendo de la base de que la demandada era quien desde hace muchos años atrás se halla en posesión pública, notoria, a vista y paciencia de todo el mundo del retazo de terreno materia de este juicio. Aparte de lo anterior se debe tener en consideración que la empresa demandante no ha acompañado al juicio ninguna inscripción de dominio emanada del Conservador de Bienes Raíces de Constitución que diga o dé cuenta que dicha empresa demandante es dueña inscrita del retazo de terreno materia de autos, por lo cual no ha podido acreditar el dominio inscrito que alega, habida consideración que cita al efecto y como fundamento una inscripción de dominio que rola a fojas 99 número 124 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Constitución, correspondiente al año



2006, que claramente se encuentra a nombre de una tercera persona jurídica que no ha comparecido demandando en esta causa. Finalmente hacer presente, que doña Marta Letelier González adquirió por compraventa celebrada con don Jorge Enrique Jaque Castillo y doña Ignomisa del Carmen Díaz Pereira, quienes aseveraron tener la posesión material de inmueble por muchos años, a vista y paciencia de todo el mundo, de manera tranquila y pacífica, no existiendo controversias judiciales de ningún tipo; toda vez que su posesión se justificaba a través de sucesiones hereditarias y es en dicho contrato de compraventa donde se singularizan los deslindes y en ningún caso aparece mención alguna de la demandante.

Solicita se revoque la sentencia apelada, en cuanto acoge parcialmente la demanda, y en su lugar declare que se rechaza en todas sus partes, manteniendo plenamente vigente el título de dominio obtenido por la demandada, con costas.

Y teniendo, además, en consideración:

Sexto: Que, establecidos los hechos, resulta necesario determinar el marco jurídico aplicable. Al efecto, cabe precisar que, tal como lo dispone el artículo 577 del Código Civil, derecho real es el que existe sobre una cosa, sin respecto a determinada persona, y de él nacen las acciones reales. En tanto que el artículo 582 prescribe que el dominio es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra la ley o contra derecho ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad.

Por su parte el artículo 889, define como acción real de dominio o reivindicatoria la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela; tal acción también se puede interponer en contra del mero tenedor, con la finalidad de que éste informe sobre quien reconoce dominio, según lo mandata el artículo 896.

Los presupuestos de la acción son los siguientes:

1.- Debe tratarse de una cosa susceptible de ser reivindicada y lo será aquella cosa corporal, con tal que sea singular (excluyéndose las



universalidades) y que se encuentre individualizada, esto es, la cosa ha de estar claramente individualizada.

2.- El reivindicante debe ser dueño de ella, siendo esencial que pueda probar su dominio, si reconoce en el demandado la calidad de poseedor (amparado la presunción de dominio del Art. 700.

3.- El reivindicante ha de estar privado de su posesión, lo cual se condice con el objeto de la acción, en razón de que al afirmar ser dueño tiene derecho a poseer la cosa, por esa razón la reivindica.

Séptimo: Que, el inciso segundo del artículo 26 del Decreto Ley N° 2695 de 1970, dispone que, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 19, los terceros podrán, dentro del plazo de un año, constado desde la fecha de la inscripción del inmueble practicada por resolución administrativa o judicial, deducir las acciones que estimen asistirles. Dicha norma establece una acción reivindicatoria para el caso que concluido el procedimiento administrativo de regularización mediante la correspondiente resolución e inscripción, terceros la ejerzan dentro del plazo de un año. En efecto, el inciso 1 del artículo 1 del Decreto Ley N ° 2695 establece: "Los poseedores materiales de bienes raíces rurales o urbanos, cuyo avalúo fiscal para el pago del impuesto territorial sea inferior a ochocientas o a trescientas ochenta unidades tributarias, respectivamente, que carezcan de título inscrito, podrán solicitar de la Dirección de Tierras y Bienes Nacionales, que se les reconozca la calidad de poseedores regulares de dichos bienes a fin de quedar habilitados para adquirir su dominio por prescripción, de acuerdo con el procedimiento que se establece en la presente ley." A su vez, el artículo 2 del referido cuerpo normativo establece los requisitos que debe cumplir el solicitante para la regularización de la propiedad raíz que corresponda, procedimiento de normalización que opera mediante el reconocimiento de la calidad de poseedor regular del bien de que se trate, a través de la dictación de un acto administrativo, quedando con ello habilitado el solicitante, para adquirir la propiedad por la vía de la prescripción, consolidando as el dominio. La inscripción del predio a nombre del solicitante, no lo transforma en dueño del inmueble, ya que no transfiere el dominio sino s lo permite adquirirlo por prescripción, al no presentarse reclamo en contrario dentro del plazo de un año. Todo lo



anterior habilita al dueño del inmueble para ejercer la acción reivindicatoria, dentro del plazo que establece el artículo 26 del cuerpo legal citado. As, es menester atender al estatuto de la posesión en cuanto a su adquisición, mantención, prueba y pérdida, para lo cual es necesario diferenciar entre el tipo de bien cuya posesión se invoca, y tratándose de un bien inmueble inscrito, debe precisarse que respecto de éstos rige la denominada teoría de la posesión inscrita.

Octavo: Que, no está demás consignar que la demanda que contiene la acción fue ejercida dentro del plazo del artículo 26 del D.L. N° 2695 y que en la especie la demandante Forestal Míninco S.p.A. cumplió con los tres presupuestos que le exigía el ejercicio de la acción interpuesta.

Noveno: Que, por estos fundamentos corresponde confirmar la sentencia recurrida de apelación.

Por estos fundamentos y lo dispuesto en los artículos 144 y 186 del Código de Procedimiento Civil, se confirma la sentencia apelada de 5 de diciembre de 2023, sin costas, por haber tenido motivos plausibles para alzarse.

Redacción del Fiscal Judicial Óscar Lorca Ferraro.

Regístrese y devuélvase.

Rol 2101-2022. Ac. Rol N°. 2040-2023 y 200-2024 Civil.

Se deja constancia que no firma la Ministra doña Jeannette Valdés Suazo, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, por encontrarse haciendo uso de feriado.





Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: GVVMXPURXKD

Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Talca integrada por Fiscal Judicial Oscar Lorca F. y Abogado Integrante Rodrigo Eduardo De La Vega P. Talca, dos de agosto de dos mil veinticuatro.

En Talca, a dos de agosto de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

